



## Acuerdo de Reserva 028-AR/S.E.A.F./2020

### Área emisora:

Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva de Administración  
y Finanzas de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Monterrey, Nuevo León, a 20 de noviembre de 2020.

Vista la solicitud de información recibida en esta Institución, en fecha 09 de noviembre de 2020, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, controlada con el número de folio 01441120; al respecto, se emite el siguiente:

## ACUERDO DE RESERVA

### I. ANTECEDENTES

En fecha 09 de noviembre de 2020, se recibió, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el requerimiento de información, al cual recayó el folio número 01441120.

Mediante la solicitud en comento, el peticionario requirió -en lo conducente- lo que a continuación se inserta:

*“De favor solicito la siguiente información con la última fecha de corte disponible, especificando también cuál es esta fecha de corte:*

**Número total de peritos** por sexo y desagregado por todas las especialidades que cuenten (balística, técnicas de campo, etc) , es decir:

*Hombres: Número especialidad 1:*

*Número especialidad 2:*

*Etc.*

*Mujeres: Número especialidad 1:*

*Número especialidad 2:*

*Etc.*

*PD. Especificar última fecha de corte de la información.”*

La solicitud en estudio fue admitida a trámite para realizar las gestiones internas correspondientes.

El requerimiento de información fue turnado a la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas, área que se estimó competente con el objeto de que se realizara una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada por el peticionario.

Dicha remisión, se efectuó en términos de lo establecido por el artículo 51 del Lineamiento Provisional para la Organización Interna de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

A partir de lo anterior, se emitió el actual acuerdo de reserva, por las siguientes consideraciones jurídicas y fácticas.

## **II. COMPETENCIA**

El suscrito, con el carácter de Director Jurídico de la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, es competente para emitir el actual Acuerdo de Reserva, en virtud de lo establecido en los artículos 9; 10, fracción XVII y 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, ya que la información solicitada por el particular es resguardada y administrada por la unidad subalterna que represento.

Dichos numerales establecen que el Fiscal General ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Institución, siendo responsable del despacho de los asuntos que a la Fiscalía General o a él mismo le atribuyen la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la presente Ley y las demás disposiciones normativas aplicables, contando - entre otras- con la facultad de designar y remover a los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la cual está conformada por las unidades descritas en la mencionada Ley Orgánica y las demás que se determinen en dicha ley, su reglamento interno y otras normativas aplicables.

Por su parte, los artículos 5, fracción XII, incisos c y f, 56, fracción I y 59 del Lineamiento Provisional Para la Organización Interna de la Fiscalía General de Justicia del Estado,



establecen algunas de las unidades administrativas que conforman esta Fiscalía General de Justicia del Estado, específicamente la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas.

Dicha Secretaría se integra, entre otras áreas, por una Dirección de Recursos Humanos y una Dirección Jurídica, dirigida por el suscrito. De igual manera, dichos numerales definen las facultades con las que cuenta dicha unidad administrativa subalterna, enfatizándose la de actuar y asesorar jurídicamente a la Secretaría Ejecutiva, representándola jurídicamente en defensa de sus intereses.

Lo anterior se relaciona con los artículos 3, fracción XLIX, y 125, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, los cuales estipulan que son sujetos obligados, entre otros, a los órganos u organismos con autonomía constitucional o legal, como es el caso de esta Fiscalía General de Justicia.

De igual manera, establecen que la clasificación de la información es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en dicho ordenamiento legal, los cuales deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y, en ningún caso, podrán contravenirla, mencionando que los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y la Ley General.

De ahí, se obtiene que la Fiscalía General de Justicia del Estado, y por consiguiente la Secretaría, cuenta con el carácter de sujeto obligado para los efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.

En tales condiciones, si por disposición legal, corresponde la responsabilidad de clasificar la información en los términos que disponga la Ley de la materia a los titulares de las áreas de los sujetos obligados que posean en sus archivos la información, al no existir al día de hoy persona que funja como Director de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el suscrito, al contar con el carácter de Director Jurídico de dicha Unidad Administrativa, y contar con la representación jurídica de la misma, me encuentro conminado a efectuar también, la clasificación de la información que se encuentre en poder de la Dirección de Recursos Humanos que represento.

### **III. OBJETO DEL ACUERDO DE RESERVA**

Resulta indispensable traer a la vista el requerimiento de información efectuado por el particular en la solicitud señalada con anterioridad, para poder determinar qué información es el objeto de la actual determinación, para mayor entendimiento, se reproduce a continuación:

*“De favor solicito la siguiente información con la última fecha de corte disponible, especificando también cuál es esta fecha de corte:*

**Número total de peritos por sexo y desagregado por todas las especialidades que cuenten (balística, técnicas de campo, etc) , es decir:**

*Hombres: Número especialidad 1:*

*Número especialidad 2:*

*Etc.*

*Mujeres: Número especialidad 1:*

*Número especialidad 2:*

*Etc.*

**PD. Especificar última fecha de corte de la información.”**

Ahora bien, se advierte que el particular dentro de su petición solicita información relacionada con el personal operativo de esta Fiscalía, pues requiere el número total de los Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado

Por lo tanto, la materia del actual Acuerdo de Reserva, en el caso que nos ocupa, es **reservar toda la información relacionada con la cantidad total de Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.**

Así las cosas, a través del actual instrumento, se debe determinar si la información que nos ocupa en el presente caso es o no pública y, por lo tanto, si puede o no permitirse el acceso de terceros.

#### **IV. CONSIDERACIONES JURÍDICAS**

El artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León prevé el reconocimiento y la protección de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política Federal, la Constitución del Estado de Nuevo León, así como en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Federal establece, decretando la obligación de las autoridades de promover,



respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Pues bien, uno de los derechos fundamentales a que hace referencia dicho numeral, para ser tutelado por el Estado, es el denominado “acceso a la información”, el cual se encuentra reconocido en el artículo 6 de la Constitución Local.

De igual manera, ese mismo numeral determina que el derecho fundamental de acceso a información cuenta con una regla general, la cual, en sentido amplio; establece que toda la información en posesión de cualquier sujeto obligado es pública.

Sin embargo, el propio artículo 6 de la Constitución Local establece los límites generales para el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues indica que la información en posesión de los sujetos obligados **podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional**, en los términos que fijen las Leyes; además, de prever que la información relativa a la vida privada y datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que determine la Ley.

También es de destacarse, que la propia Constitución Federal, la Constitución Local y las diversas leyes adjetivas, han establecido diversas condiciones legales para su aplicación. Por ello, el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información se encuentra supeditado a los términos y condiciones que establece la Ley para su ejecución.

Inclusive, la Primera Sala de nuestro tribunal constitucional, al resolver el amparo en revisión 173/2012, se pronunció en el sentido de que no existen derechos fundamentales absolutos, pues del propio artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que los derechos fundamentales pueden ser restringidos o suspendidos bajo ciertas condiciones y con determinados requisitos.

A mayor abundamiento, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite que derechos fundamentales, como el de acceso a la información, puedan ser limitados por cuestiones de interés público, en los términos que fijen los ordenamientos legales, tomando en cuenta el propósito para el cual fueron establecidos.

Por lo anterior, es inconcuso que el derecho fundamental en estudio **no es absoluto**, puesto que en la regulación para su ejercicio se han establecido algunas restricciones y limitaciones legales que condicionan su aplicación, por lo que resulta necesario conocer las premisas que establece la Ley que regula el derecho fundamental en cuestión.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, es de orden público y de observancia general en todo el Estado en materia de transparencia y acceso a la información, y precisamente, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier sujeto obligado.

El artículo 4 del ordenamiento jurídico en comento, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 6 Constitucional, establece -en lo conducente- que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la Ley en comento, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la Ley General, **con excepción de la clasificada temporalmente como reservada, por razones de interés público en los términos dispuestos en la Ley**, señalándose que los sujetos obligados en ningún caso podrán negar el acceso a la información estableciendo causales distintas a las señaladas en la Ley de la materia.

No pasa desapercibido para este sujeto obligado, que el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, establece los supuestos en los cuales una información puede ser clasificada como reservada. Explicaremos.

En primer lugar, el numeral 138 de la Legislación en análisis, establece lo siguiente:

*“Artículo 138. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

***I. Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;***

***II. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;***

*III. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;*

*IV. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;*

*V. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;*

*VI. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;*

*VII. Afecte los derechos del debido proceso;*

*VIII. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;*





*IX. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; y*

*X. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.”*

De lo antes visto puede desprenderse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León establece una serie de causas específicas por las cuales puede clasificarse la información con el carácter de reservada.

Lo antes mencionado, porque no obstante que el acceso a la información es un derecho fundamental reconocido Constitucionalmente, y que debe ser interpretado a la luz del principio de máxima publicidad, como quedó apuntado con anterioridad, éste no constituye un derecho absoluto y su ejercicio individual no debe superar nunca el interés general.

Dicho lo anterior, procederemos a exponer cómo es que nuestro marco normativo no sólo permite, sino que conmina a los sujetos obligados a aplicar las excepciones establecidas en las normas para los casos que así lo ameriten, como es el correspondiente al caso en estudio.

## **V. PRUEBA DE DAÑO**

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, se inscriben las razones, motivos y/o circunstancias especiales que llevan a este sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta a algunos de los supuestos contenidos en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.

### **1. Análisis del Caso**

Como se menciona en el párrafo anterior, este sujeto obligado considera que, en el caso en concreto, la información solicitada por el particular debe otorgársele el carácter de reservada por encontrarse en los supuestos que establece el artículo 138 de la mencionada Ley de Transparencia estatal, específicamente, en aquellos contemplados en las fracciones I y II de dicho numeral. Expliquemos por qué.

Para los efectos de clasificar la información solicitada, basta con advertir que la petición versa sobre la cantidad total de los servidores públicos que ostentan el cargo de Perito de la

Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, razón por la que se estima que se surten, en el particular, las siguientes hipótesis legales de reserva:

- Comprometer la seguridad pública;
- Poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

Ya que la información solicitada está relacionada con la seguridad pública del Estado y permitir su acceso podría vulnerarla, poniendo en peligro el orden público y en riesgo la vida y la seguridad de los elementos encargados de velar por ella, incluso de los habitantes del territorio. Ello en virtud de que revelar la información solicitada dejaría expuesto el estado de fuerza de la institución encargada de procurar justicia y perseguir los delitos; dejando al descubierto sus capacidades de acción y de reacción.

De igual manera, revelar la información solicitada potencializa al crimen organizado, pues si hicieran mal uso de la información peticionada podrían eliminar, corromper o anticipar las labores de investigación de los integrantes que auxilian en la procuración de justicia, incidiendo en el combate a la delincuencia y las conductas antisociales, la prevención y control del delito y de las infracciones administrativas, dejando expuesto severamente a dichos elementos operativos, poniendo en riesgo no sólo su integridad física, sino su vida.

Asimismo, la publicidad de cualquier tipo de información que haga identificable a los servidores públicos de la Fiscalía General, en este caso la cantidad total de los servidores públicos que ostentan el cargo de Perito de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, podría servir como un dato estratégico para que los grupos delictivos conozcan los alcances operativos de esta Representación Social y por consecuencia, la estrategia que pudiera desplegarse para el cumplimiento de sus objetivos legítimos ya que tendrían la posibilidad de anticiparse, eludir, obstaculizar o bloquear las operaciones que se ejercen en materia de procuración de justicia, alterándose así, el orden público y poniendo en riesgo la integridad física e incluso la vida, no sólo de dichos elementos, sino de la ciudadanía.

Por lo tanto, al darse la información peticionada, no cabe duda de que se pondría de manifiesto el estado de fuerza para el cumplimiento de las atribuciones constitucionalmente encomendadas a esta institución, pues quedaría expuesto el número total y máximo de los servidores públicos que ostentan el cargo de Perito con el que se cuenta; evidenciando, incluso, sus deficiencias, lo que generaría un peligro y pondría en riesgo los objetivos de esta institución, la persecución y la investigación de los delitos.





Con lo anterior, queda demostrado que se actualizan las hipótesis legales contenidas en el artículo 138, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

## 2. Fundamento Legal

Los numerales 25 y 87, tercer y cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, refieren que la investigación de delitos le corresponde al Ministerio Público, debiendo el Estado salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Estado y los Municipios que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva.

De igual manera, establecen que el Ministerio Público es la institución que tiene por objeto ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad, velar por la exacta observancia de las leyes de interés general y perseguir los delitos del orden común, y será desempeñado por una Fiscalía General de Justicia del Estado que contará por lo menos con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y otra especializada en Delitos Electorales, por los Agentes de dicho Ministerio y demás servidores públicos que determine la Ley, siendo ésta un organismo autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión en los términos que determine la Ley.

Lo anterior se relaciona con lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que define como una facultad del Ministerio Público, el investigar los delitos que le corresponden al Estado, con el auxilio de las Policías y los servicios periciales.

Asimismo, los artículos **décimo, séptimo, décimo octavo y décimo noveno** de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, disponen, en lo conducente, lo siguiente:

***"Décimo séptimo.** De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional cuando:*

- I. Se quebrante la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;*
- II. Se atente en contra del personal diplomático;*

- III. Se amenace o ponga en riesgo la gobernabilidad democrática porque se impida el derecho a votar o a ser votado, o cuando se obstaculice la celebración de elecciones;
- IV. Se obstaculicen o bloqueen las actividades de inteligencia o contrainteligencia y cuando se revelen normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo que sean útiles para la generación de inteligencia para la seguridad nacional;
- V. Se vulneren las acciones para evitar la interferencia extranjera en los asuntos nacionales;
- VI. Se ponga en peligro la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional;
- VII. Se puedan menoscabar, obstaculizar o dificultar las estrategias o acciones para combatir la delincuencia organizada, la comisión de los delitos contra la seguridad de la nación, entendiéndose estos últimos como traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración, el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;
- VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;
- IX. Se obstaculicen o bloqueen acciones tendientes a prevenir o combatir epidemias o enfermedades exóticas en el país;
- X. Se difundan las actas o documentos generados en las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional y actualice alguna de las amenazas previstas en la Ley de Seguridad Nacional, o que
- XI. Se entreguen los datos que se obtengan de las actividades autorizadas mediante resolución judicial, así como la información producto de una intervención de comunicaciones privadas autorizadas, conforme a las disposiciones previstas en el Capítulo II del Título III de la Ley de Seguridad Nacional, y constituyan alguna de las amenazas previstas en dicha Ley.

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad nacional; sus normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignan.”

**“Décimo octavo.** De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, **aquella que comprometa la seguridad pública**, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.

Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que **revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la**



*seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de comunicaciones.”*

*“Décimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información reservada que compromete la defensa nacional, aquella que difunda, actualice o potencialice un riesgo o amenaza que ponga en peligro las misiones generales del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana o Armada de México, relacionadas con la defensa del Estado mexicano, para salvaguardar la soberanía y defender la integridad, y permanencia del territorio nacional.*

*Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción del Estado, sus planes, o uso de tecnología, información y producción de los sistemas de armamento y otros sistemas militares incluidos los sistemas de comunicaciones.”*

De lo anterior se deduce que la información solicitada debe tratarse con el carácter de reservada, en virtud de que, al dar a conocer el número total de Peritos, permitiría dar a conocer la capacidad de reacción que tiene la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Dicho en otras palabras, al poner a disposición del público la información relativa a la cantidad total de los servidores públicos que ostentan el cargo de Perito de la Fiscalía General de Justicia, dentro de éste podrían encontrarse personas relacionadas con la delincuencia organizada, quienes podrían hacer uso de dicha información para mermar las acciones emprendidas por esta Institución en la investigación y persecución de delitos y pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción del Estado, sus planes e incluso vulnerar las investigaciones a cargo del personal operativo y administrativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues podrían anticiparse o debilitarse las labores que tienen encomendadas.

## **VI. CONCLUSIONES**

En virtud de todo lo anterior, se emiten de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes conclusiones.

1. Publicar la cantidad total de Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, pone en peligro la seguridad pública del Estado, así como en riesgo la vida, seguridad o salud de los elementos encargados de velar por ella y de los habitantes de la entidad federativa.

2. La publicidad de la información relativa a la cantidad total de los servidores públicos de esta institución revelaría el Estado de Fuerza, así como las capacidades operativas, logísticas y de reacción del cuerpo de procuración de justicia del Estado.

3. No existe legitimación legal para conocer el Estado de Fuerza de la Fiscalía General de Justicia y su capacidad técnica y operativa, mediante la utilización de un mecanismo de acceso a la información pública, por las consideraciones señaladas con anterioridad.

## **VII. INFORMACIÓN RESERVADA**

En conclusión, con el presente Acuerdo de Reserva, se declara como reservada toda la información relacionada con la cantidad total de Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

### **1. Oportunidad del presente Acuerdo de Reserva**

El numeral 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, establece lo siguiente:

*“Artículo 131. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

*I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

*II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

*III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.”*

Del dispositivo legal antes señalado, se advierte que -en el caso concreto- nos encontramos en el supuesto establecido en la primera fracción, es decir, cuando se reciba una solicitud de acceso a la información.

Por ello, el numeral transcrito sirve como fundamento legal para soportar la oportunidad del presente Acuerdo de Reserva, puesto que fue necesario clasificar la información materia del actual instrumento a partir de la solicitud de acceso a la información recibida en fecha 09 de noviembre de 2020 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con el número de folio 01441120.

### **2. Término de la Reserva de la Información en Estudio**

En términos del artículo 132 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, la información materia del actual acuerdo de reserva deberá guardar tal



carácter por un periodo de 5-cinco años, sin perjuicio de que al final del mismo, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley pudiera optarse por su ampliación.

### **3. Área que resguarda la información**

El área que resguarda la información será la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, esta Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas:

#### **Resuelve:**

**PRIMERO:** Se determina reservada, y fuera del alcance de dominio público, por el término de 5-cinco años, contados a partir de la emisión del presente acuerdo, **toda la información relacionada con la cantidad total de Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.**

**SEGUNDO:** Sométase el actual Acuerdo de Reserva a autorización del Comité de Transparencia de este sujeto obligado.

**Licenciado Daniel Iván Ruiz Chávez**

**Director Jurídico de la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas  
de la Fiscalía General de Justicia del Estado.**